

Puerto Montt, doce Enero de dos mil veintiuno

VISTOS:

Que estos autos se elevan para conocer de los recursos de casación en la forma y de apelación deducidos por las demandantes Marisol del Carmen Mansilla Sánchez y Carla del Carmen Díaz Mansilla, en contra de la sentencia definitiva dictada el 8 de Abril de 2019, por el Primer Juzgado Civil de Puerto Montt, en la causa Rol C-1510-2017, sobre juicio ordinario de indemnización de perjuicios por responsabilidad extracontractual, caratulada “Aguayo con Empresa Portuaria Puerto Montt”, que rechazó el libelo.

Y considerando:

En cuanto al recurso de casación en la forma:

Primero: Que, la recurrente funda su recurso de casación en la forma en la causal contemplada en el artículo 768 número 5 del Código de Procedimiento Civil, esto es, haber sido pronunciada la sentencia con omisión de cualquiera de los requisitos enumerados en el artículo 170 del mismo código, específicamente los del número 4 que dispone que las sentencias definitivas contendrán “las consideraciones de hecho o de derecho que sirven de fundamento a la sentencia”, al no analizar ni ponderar toda la prueba rendida por su parte, ni fundamentar por qué la desestima, limitándose la sentencia solo a enumerarla, careciendo por ello de consideraciones de hecho.

Lo anterior en relación a los numerales 5, 6 y 7 del Auto Acordado de la Excm. Corte Suprema que establece la forma en que deberán ser redactadas las sentencias definitivas y las que revoquen o modifiquen las de otros tribunales, conforme al cual aquellas deben contener, N° 5 “Las consideraciones de hecho que sirven de fundamento al fallo. Se establecerán con precisión los hechos sobre que versa la cuestión que debe fallarse, con distinción de los que hayan sido aceptados o reconocidos por las partes y de aquellos respecto a los cuales haya versado la discusión”; N° 6 “Enseguida, si no hubiere discusión acerca de la procedencia legal de la prueba, los hechos que se encuentren justificados con arreglo a la ley y los fundamentos que sirvan para estimarlos comprobados, haciéndose, en caso necesario, la apreciación correspondiente de la prueba de autos conforme a las reglas legales” y N° 7 “Si se suscitare cuestión acerca de la procedencia de la prueba producida, la exposición de los fundamentos que deben servir para aceptarla o rechazarla, sin perjuicio del establecimiento de los hechos en la forma expuesta en los párrafos precedentes para los fines consiguientes”.

Sostiene que la sentencia contiene dos vicios en relación a la causal de casación invocada, el primero de ellos por falta de valoración adecuada de la prueba y el segundo, por adolecer de falta de consideraciones de hecho y



derecho, al no establecer los fundamentos por los cuales no le otorga valor probatorio a determinada prueba documental rendida por su parte.

El primer vicio atribuido a la sentencia lo funda en que el sentenciador debe valorar toda la prueba, de acuerdo a la legislación procesal, pero también esa prueba, debe estar acorde con normas de fondo y por lo tanto de aceptarse un medio probatorio, este medio debe ser legalmente examinado, no bastando con un listado de la prueba rendida o una descripción numérica de la misma.

Señala que la sentencia no analizó ni ponderó los siguientes documentos contenidos en la carpeta investigativa seguida por la Fiscalía Local de Puerto Montt, Ruc N° 1300728282-0, Rit N° 7497-2013:

1.- Informe de autopsia N° 195-2013 emitido por el Servicio Médico Legal Región de Los Lagos con fecha 30 de julio de 2013.

2.- Informe Policial N° 482.-/01002 emitido por la Policía de Investigaciones con fecha 29 de julio de 2013.

3.- Informe Científico técnico del sitio del suceso N° 102 emitido por la Policía de Investigaciones de Chile por el servicio de turno la semana del 22 al 29 de julio de 2013.

4.- Informe Policial 703 realizado por la Policía de Investigaciones con fecha 21 de octubre del 2013.

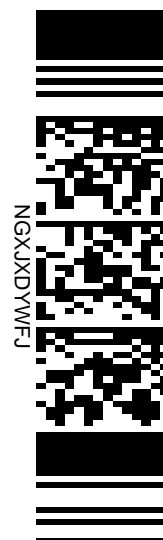
5.- Informe de Investigación de Accidente Marítimo “Fallecimiento del Sr. Juan Carlos Díaz Aguayo en el recinto portuario de la Empresa Portuaria Puerto Montt” emitido por la Dirección General del Territorio Marítimo y Marina Mercante – Gobernación Marítima de Puerto Montt, con fecha 6 de agosto de 2013.

6.- Declaración simple realizada ante el Seremi de Salud de don Robinson Pérez Galleguillos, jefe de seguridad de Empormontt con fecha 26 de julio de 2013.

7.- Declaración de inculpado realizada ante la Brigada de Homicidios de la Policía de Investigaciones de Puerto Montt el día 21 de octubre del 2013 de don Pedro Mauricio Canales Pardo.

8.- Copia del Ord. N° 471 de fecha 25 de septiembre de 2013 de la Brigada de Homicidios de Puerto Montt, y su respuesta efectuada por el gerente general de Empormontt don Alex Winkler.

Afirma que en estos documentos cuyo análisis se omitió, consta que la víctima fatal falleció al interior de las instalaciones portuarias mientras realizaba tareas de trasvasije de ganado, que no había procedimientos de carga y descarga y/o de trasvasije establecidos por parte de la demandada, que existieron contradicciones en la prueba, en cuanto a cómo la víctima desarrollaba tareas, por un extremo se expresa que entró de manera furtiva por uno de los accesos,



diciendo el Gerente General de la demandada que ingresó al Puerto dentro de un camión, y el Jefe de Seguridad, reconoce de manera expresa que la víctima desde hacía años realizaba tareas ocasionales y era conocido en el Puerto de la demandada.

Dice, que la jurisprudencia ha señalado que la sentencia no cumple con los requisitos que debe contener en cuanto a elaboración de la prueba si solo enumera los medios de prueba.

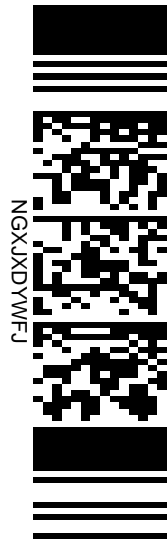
Señala que el vicio denunciado influye en lo dispositivo del fallo, porque si el sentenciador hubiese ponderado toda la prueba documental aportada por la demandante, especialmente los documentos individualizados anteriormente, habría llegado a un criterio distinto en la controversia en orden a que la dinámica del accidente acreditaba serias deficiencias en materia de seguridad, de procedimientos de trabajo seguro, de supervisiones, deficiencias en dirección y control, que dicha conducta de la demandada conformaba una severa deficiencia en materia de diligencia, cuidado, supervisión, supervigilancia de las tareas desarrolladas al interior de las instalaciones portuarias y así, todo ello eran acciones y omisiones que daban estructura en la fáctico a un hecho ilícito generador de responsabilidad y en consecuencia, la demandada era responsable del daño causado toda vez que su estructura corporativa mediante el desarrollo de sus actividades, había causado una muerte, la del familiar de los demandantes, razón suficiente por lo cual se debía acoger la demanda reparatoria e indemnizar a las actoras.

El recurrente hace consistir el segundo reproche en adolecer la sentencia de falta de consideraciones de hecho y de derecho, vulnerando el artículo 170 N° 4 del Código de Procedimiento Civil, por no haber la sentenciadora establecido respecto de los documentos singularizados anteriormente, las motivaciones por las cuales le asignaba un valor determinado o no le daba ninguno.

Cita al efecto jurisprudencia relativa al requisito en análisis.

Expone cuales debieron ser las conclusiones que debieron ser extraídas de la prueba no analizada y que conllevarían a tener por acreditada la responsabilidad de la demandada.

Sostiene, que este vicio influye en lo dispositivo del fallo, ya que si el juez hubiera ponderado toda la prueba existente a la luz de la normativa nacional y establecido los fundamentos que lo conllevaron a tomar su determinación, habría llegado a un criterio distinto estableciendo que es concurrente la culpa de la demandada asistiéndole el deber de reparar los perjuicios y por ello, correspondía acoger el libelo pretensor.



Pide que el recurso se acoja, que la sentencia se anule y se proceda a dictar la correspondiente sentencia de reemplazo, acogiendo la demanda indemnizatoria en los términos planteados en el libelo, con costas.

Segundo: Que, del examen de la sentencia impugnada, se constata que aquella en su considerando octavo, menciona la prueba documental acompañada por la parte recurrente, incluyendo la que no habría sido analizada según el reproche formulado; en el considerando noveno se refiere a la prueba testimonial, rendida por el demandante, reproduciendo los testimonios de los tres testigos presentados por dicha parte; en el considerando décimo, reseña la prueba documental rendida por la demandada; en el considerando undécimo, relata la prueba testifical rendida por la demandada, transcribiendo el testimonio de sus testigos; en el considerando duodécimo, se refiere a la exhibición documental consistente en el “Plan de Protección Instalación Portuaria, Código ISPS”; en el considerando décimo tercero, hace relación a los oficios despachados a diferentes entidades y sus respuestas; en el considerando décimo octavo, analiza los requisitos que deben concurrir para que sea procedente la acción incoada; en el considerando vigésimo, establece en base a la prueba rendida, contemplándose entre ellas, la documental cuya falta de valoración reprocha el recurrente, los indicios que fundan las presunciones judiciales para el establecimiento de los hechos del proceso, en base a los cuales examina en la especie, la concurrencia de los elementos fácticos de la acción interpuesta, fundamentando su decisión de rechazar el libelo por inexistencia de responsabilidad atribuible a la demandada.

Tercero: Que, la decisión de la juez a quo para rechazar el libelo, se sustenta en la falta de acreditación de los presupuestos fácticos de la acción interpuesta por la parte demandante, estimando insuficientes o irrelevantes los antecedentes allegados por ésta para su acreditación.

Al efecto, la sentencia impugnada establece como hechos de la causa, los siguientes:

a. Que el día 26 de julio 2013, alrededor de las 09:00 horas al interior de la Empresa Portuaria de Puerto Montt, don Juan Carlos Díaz Aguayo, efectuaba labores de trasvasije de animales entre una rampla procedente de Puerto Natales y otra rampla que llevaría los animales a la zona de Temuco.

b. Por efecto de un golpe en el área torácica, mientras intentaba abrir las puertas de una rampla ganadera patente JG 2298 perteneciente a Transportes Víctor Mena G EIRL., fue violentamente pateado por un bovino en el pecho, haciendo que se caiga al suelo golpeándose también la cabeza cayendo al suelo de cemento en el lugar de estacionamiento de las ramplas, produciéndose su muerte.



c. Luego se pudo acreditar que el Sr. Juan Carlos Díaz Aguayo, no era trabajador portuario, no realizaba una actividad como trabajo portuario, y no existen registro de su ingreso en los controles de acceso a los recintos portuarios de Empormontt, y de acuerdo al mérito de la investigación realizada por la Brigada de Homicidios de Puerto Montt, y de las imágenes analizadas instaladas en el ingreso del recinto portuario, habría entrado por un lugar no apto para tal efecto, burlando las medidas de seguridad del recinto.

d. Además tampoco consta que la víctima don Juan Carlos Díaz Aguayo hubiere tenido alguna relación contractual con alguna empresa relacionada con la actividad marítima al interior de los recintos de Empormontt, ni aun bajo la modalidad de subcontratista.

e. Que la investigación iniciada en causa Ruc 1300728282, Rit N° 7497-2013 del Juzgado de Garantía de Puerto Montt, fue concluida por comunicación de no perseverar de la Fiscalía Local de Puerto Montt, por no haberse reunido los antecedentes suficientes para fundar una acusación.

f. Que la instalación portuaria a la fecha de ocurridos los hechos contaba con plan de protección de dicha instalación vigentes de acuerdo a las disposiciones de los capítulos VII y XI del Convenio SOLAS 74 y de la parte A del Código Internacional para la Protección de Buques y de las instalaciones portuarias (Código PBIP).

Estos hechos, están en armonía con las conclusiones a las cuales llegó la sentenciadora.

Cuarto: Que, para justificar sus conclusiones, la sentencia se sustenta en la inexistencia de una acción culpable o dolosa del agente, señalando entre otros fundamentos, en el considerando vigésimo primero que “No resulta posible establecer la responsabilidad del demandado Empresa Portuaria Puerto Montt, en los hechos ocurridos el día 26 de julio de 2013, consistentes en la muerte de don Juan Carlos Díaz Aguayo, producto de las labores de trasvasije de animales que realizada entre ramplas de dos empresas de Transportes, pues no consta en autos vínculo de dependencia alguno de la persona señalada tanto respecto de la demandada, como con ninguna de las empresas que realizaban el trasvasije, y para las cuales pudiera haber estado prestando servicios el día de los hechos. En efecto y recayendo en la parte demandante acreditar este vínculo –ya fuere civil o laboral-, no allegó al proceso antecedente probatorio alguno con este fin, constando por el contrario, que ingresó al recinto portuario de forma irregular y fuera de los controles de seguridad de la demandada”.

Quinto: Que, de lo expuesto y razonamientos contenidos en la sentencia, se desprende que aquella en sus determinaciones contiene las consideraciones



de hecho y de derecho que le sirven de fundamento para rechazar la demanda, ponderando la prueba rendida, incluyendo aquella cuestionada por el recurrente y las circunstancias fácticas que se establecieron producto de dicha labor intelectual, y el modo en que fueron subsumidas en las normas sustantivas atingentes, que le permitieron arribar a sus determinaciones, no siendo efectivo que haya existido falta de valoración de la prueba rendida por el recurrente, ni tampoco que carezca de motivaciones al apreciarse aquella.

Por otro lado, se observa que el recurrente, más que las faltas de consideraciones sobre la prueba rendida, lo que cuestiona es la valoración de la prueba que hace la sentenciadora, restándole mérito a sus probanzas, por no estar aquellas acordes con la posición jurídica que ella ha sustentado, lo que no configura el motivo de nulidad invocado.

Sexto: Que, sin perjuicio de lo anterior, es necesario considerar que de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 768 inciso penúltimo del Código de Procedimiento Civil, se requiere para que sea procedente la invalidación de la sentencia, que el vicio invocado haya influido sustancialmente en lo dispositivo del fallo, esto es, en la especie, si la correcta valoración de la prueba instrumental que menciona el recurrente, habría determinado una decisión distinta a la que llegó la jueza a quo, cuál sería acoger el libelo, lo que no se advierte en la especie, toda vez que aquella no logra desvirtuar los hechos que se tuvieron por establecidos en la sentencia y en los cuales, la sentenciadora fundó sus conclusiones.

Séptimo: Que, conforme se viene razonando, la sentenciadora a quo no ha incurrido en el vicio que se reprocha, de manera que no se configura la causal formal alegada, por lo que el recurso de casación en la forma no podrá ser acogido.

En cuanto al recurso de apelación: Se reproduce la sentencia en alzada, y se tiene además presente:

Octavo: Que, toda la línea argumental en la cual el recurrente funda su recurso, es desarrollada sobre la base que se encontraría acreditada la responsabilidad de la demandada, considerando que el artículo 2329 del Código Civil, en el cual sustenta la responsabilidad de aquella, establece una presunción de responsabilidad del sujeto pasivo de la acción, al cual le corresponde desvanecer probando la debida diligencia y cuidado o eximirse de responsabilidad probando caso fortuito o fuerza mayor, lo que no se alegó, habiendo su parte probado el hecho que le correspondía acreditar que era la muerte del familiar de las actoras, al interior de las instalaciones portuarias, mientras realizaba tareas de trasvasije de animales, habiendo probado que la demandada ha actuado con



negligencia infraccionando el deber de cuidado general de velar por la seguridad de todas las personas que se encuentren al interior del recinto portuario.

Por la misma razón estima que la sentencia invierte la carga de la prueba, infraccionando el artículo 1698 del Código Civil, toda vez que a la demandada le correspondería probar las medidas de diligencia y cuidado para eximirse de responsabilidad, lo que no hizo.

Noveno: Que, el artículo 2329 del Código Civil, en su inciso primero prescribe: “Por regla general todo daño que pueda imputarse a malicia o negligencia de otra persona, debe ser reparado por ésta”.

En torno a esta norma, existen dos líneas jurisprudenciales respecto a su interpretación, entendiendo la mayoritaria que esta disposición no hace más que confirmar la regla del artículo 2314 del Código Civil, en cuanto a que la culpa del autor del daño es carga probatoria de la víctima y, la otra posición considera que este artículo contempla una fuente autónoma de responsabilidad civil extracontractual, constituyendo una presunción de responsabilidad de culpa y de relación causal por hechos propios, cuando los hechos por si mismos denotan culpabilidad o cuando por las circunstancias en que se produjeron son susceptibles de presumir la culpa.

Décimo: Que, según se desprende de los considerandos décimo octavo, vigésimo primero y vigésimo tercero de la sentencia impugnada, la sentenciadora siguió la primera interpretación jurisprudencial del artículo 2329 del Código Civil, al rechazar el libelo por no haber acreditado la parte demandante que la demandada haya incurrido en una acción culpable que sea la causa de los daños que la demandante reclama.

Décimo primero: Que, aun cuando se interpretara la norma en comento, de acuerdo a la segunda posición jurisprudencial señalada en el considerando noveno de este fallo, para que opere la presunción de responsabilidad de culpa del sujeto pasivo de la acción y de relación causal por hechos propios, en el caso sub lite, no tendría aplicación esta presunción, considerando que los hechos del proceso no evidencian por si mismos culpabilidad de la demandada, ni tampoco las circunstancias en que se produjo el lamentable fallecimiento de don Juan Carlos Díaz Aguayo, hacen presumir su culpabilidad.

Décimo segundo: Que, para arribar a la conclusión anterior, se considera que de acuerdo a los hechos asentados correctamente en el proceso, de acuerdo a la prueba rendida, se tuvo por acreditado que el día 26 de julio de 2013 don Juan Carlos Díaz Aguayo falleció al interior del recinto de la Empresa Portuario Puerto Montt, mientras efectuaba labores de trasvasije de animales entre una rampla procedente de Punta Arenas y otra que llevaría los animales a otra zona,

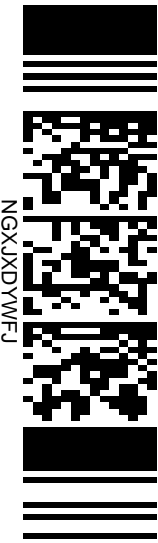


por un golpe propinado por una patada de un bovino mientras abría una rampla ganadera, cayendo al suelo de cemento en el lugar de estacionamiento de la rampla; que aquel no era trabajador portuario, no realizando ninguna actividad de trabajo portuario; que no existía registro de su ingreso al recinto, habiendo entrado por un lugar no apto para ello, burlando las medidas de seguridad; que tampoco tenía relación contractual con alguna empresa marítima al interior de los recintos de la demandada ni aun bajo la modalidad de subcontratista; que la investigación penal por su fallecimiento concluyó al haber hecho la Fiscalía local de Puerto Montt uso de la facultad de no perseverar.

Décimo tercero: Que, además debe considerarse, tal como lo hizo acertadamente la sentenciadora a quo, en los considerandos décimo noveno y vigésimo primero, que la empresa demandada de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 4 de la Ley 19.542 tiene como objeto: "...la administración, explotación, desarrollo y conservación de los puertos y terminales, así como los bienes que posean a cualquier título, incluidas todas las actividades conexas inherentes al ámbito portuario indispensables para el debido cumplimiento de éste. Podrán, en consecuencia, efectuar todo tipo de estudios, proyectos y ejecución de obras de construcción, ampliación, mejoramiento, conservación, reparación y dragado en los puertos y terminales. Asimismo, podrán prestar servicios a terceros relacionados con su objeto".

Y el artículo 5, inciso primero de la misma ley, dispone: "La prestación de los servicios de estiba, desestiba, transferencia de la carga desde el puerto a la nave y viceversa, y el porteo en los recintos portuarios, comprendidos dentro del objeto de las empresas, deberá ser realizada por particulares debidamente habilitados."

Décimo cuarto: Luego, de los hechos y circunstancias referidas en los motivos anteriores, no es posible presumir la culpa de la demandada ni la relación causal, todo lo contrario, se deduce que aquella no tiene responsabilidad en el fallecimiento de la víctima, ya que ésta no realizaba ningún tipo de trabajo para ella, siendo las labores que realizaba al momento de su deceso, ajenas al objeto de la empresa demandada, no pudiendo por ello exigírsele que tenga protocolos para la carga y descarga de animales y reglamentos de higiene y seguridad, dado que el cumplimiento de estas medidas le corresponden a los particulares que las realicen en el marco de la legislación laboral que exige que se tomen las medidas de protección y seguridad, cuando exista un contrato de trabajo y en el régimen de trabajo de subcontratación.



Por consiguiente, al ejercer la demandada una actividad regulada por la ley y no haberse acreditado ninguna infracción a la normativa legal o reglamentaria que le sea aplicable, aquella carece de responsabilidad.

Décimo quinto: Por los mismos razonamientos expuestos en los considerandos anteriores, no puede estimarse que la sentenciadora haya infringido el artículo 1698 del Código Civil, alterando el peso de la prueba al rechazar el libelo por no haber acreditado la parte demandante que la demandada hay incurrido en una acción culpable o dolosa que haya provocado el daño.

Por estas consideraciones y lo dispuesto en los artículos 170 N°4, 768 N°5 y 186 y siguientes del Código de Procedimiento Civil, se declara:

- I. Que, **se rechaza** el recurso de casación en la forma interpuesto por el abogado Francisco Javier Hurtado Peñaloza, en representación de las demandantes Marisol del Carmen Mansilla Sánchez y Carla del Carmen Díaz Mansilla, en contra de la sentencia definitiva dictada el 8 de Abril de 2019, por el Primer Juzgado Civil de Puerto Montt.
- II. Que, **se confirma**, la sentencia definitiva dictada el 8 de Abril de 2019, por el Primer Juzgado Civil de Puerto Montt.
- III. Que no se condena en costas a la parte demandante, por haber tenido motivo plausible para alzarse.

Redacción de la Abogado Integrante María Herna Oyarzún Miranda.-

Regístrese y devuélvase.

Rol N° 941-2019.



Pronunciado por la Primera Sala de la C.A. de Puerto Montt integrada por Ministro Presidente Juan Patricio Rondini F., Ministro Jaime Vicente Meza S. y Abogado Integrante Maria Herna Oyarzun M. Puerto Montt, doce de enero de dos mil veintiuno.

En Puerto Montt, a doce de enero de dos mil veintiuno, notifiqué en Secretaría por el Estado Diario la resolución precedente.

